



Cringe!

Hubo un tiempo en que la embajada de México en el Reino Unido —ubicada en Hanover Square, plaza londinense que debe su nombre a la dinastía de la que fue parte la reina **Victoria**— era una representación diplomática de altura, a la que sólo llegaban políticos o miembros del Servicio Exterior de la más larga trayectoria.

Por ahí pasaron exintegrantes del gabinete económico como **Narciso Bassols**, **Eduardo Suárez** y **Hugo B. Margáin**; excancilleres o futuros secretarios de Relaciones Exteriores, como **Isidro Fabela**, **Manuel Tello Macías** y **Bernardo Sepúlveda**, y diplomáticos experimentados como **Juan José Bremer** y **Julián Ventura**.

Pese a esa historia, la autodenominada Cuarta Transformación, que tiene una marcada tendencia a volverlo todo chafa, decidió que el país estaría bien representado ante la quinta economía mundial por una señora cuyo historial se destaca por haber ordenado, en 2019, que un avión comercial demorara su salida para que ella no perdiera el vuelo, cuando se desempeñaba como secretaria de Medio Ambiente.

Su entonces jefe, el presidente **Andrés Manuel López Obrador**, decidió que la renuncia que **Josefa González-Blanco** presentó por ese hecho bochornoso no le impedía ser embajadora ante el Reino Unido, apenas dos años más tarde, puesto que lo único importante para él es que sus colaboradores le fueran leales. Lo que esa designación afectara la relación bilateral era lo de menos.

Hoy, a punto de dejar la embajada —para que recale en ella **Alejandro Gertz Manero**, quien la recibió, como premio, por renunciar a la Fiscalía General de la República—, **González-Blanco** está en el centro de un escándalo, por una serie de denuncias presentadas por varios de sus colaboradores, quienes se quejan de hostigamiento laboral y malos manejos de recursos públicos por parte de ella.

De acuerdo con una investigación del diario español *El País*, trabajadores y extrabajadores de la misión diplomática describen un ambiente de intimidación sistemática, castigos arbitrarios y aislamiento forzado. La práctica más simbólica fue bautizada internamente como “la dog house” o “la congeladora”: empleados a los que la embajadora dejaba de dirigir la palabra, privaba de información y funciones, y sobre los que instruía al resto del personal a no tener contacto alguno.

Cringe, dirían los británicos. Es decir, algo que produce sentimientos de vergüenza e incomodidad.

El resultado de esa práctica fue devastador. Desde 2021, al menos 40 trabajadores abandonaron la embajada, entre renuncias y rotaciones forzadas. Algunos denunciantes reportaron consecuencias severas para su salud física y mental, incluidas crisis de ansiedad e incapacidades médicas otorgadas por el sistema de salud británico. Todo ello ocurrió, según testimonios, pese a que los denunciantes ganaron procedimientos ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética de la Cancillería. La embajadora, dice *El País*, se negó a cumplir recomendaciones alegando que eran “subjetivas”, y no hubo quién la obligara a cumplirlas.

González-Blanco ha rechazado las acusaciones, afirmando que derivan de inconformidades con auditorías en curso y asegurando que la relación bilateral con el Reino Unido se mantiene “sólida”. Sin embargo, empleados citados por el diario sostienen lo contrario: ausencia de diálogo político, parálisis en la cooperación académica y una embajada más concentrada en eventos sociales que en trabajo diplomático sustantivo.

El caso no puede desligarse de un contexto político, en el que las principales embajadas de México en el mundo han servido para dar premios o para colocar a adeptos a la Cuatroté. Eso sucede, como escribí aquí en octubre pasado, en 12 de los 30 países de la OCDE, y en todos los del G7.

El escándalo, revelado por *El País*, plantea una pregunta incómoda: ¿habrá consecuencias reales o, una vez más, el costo del abuso recaerá exclusivamente en los trabajadores? Mientras no se responda con hechos, el mensaje es claro y preocupante: en la diplomacia mexicana, la lealtad política sigue pesando más que la legalidad, la ética y el servicio público. Y de tratar a Londres como basurero, mejor ni hablamos.

